



## **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

### **SALA LABORAL**

Medellín, marzo 9 de 2023

Radicado: 05088- 31- 05-**009-2018-0009-01**  
Demandantes ISABEL CRITINA LONDOÑO OROZCO y Otro  
Demandados E.S.E METROSALUD  
Asunto: Asunto: CONTRATO REALIDAD

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, la que se expone en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

### **ANTECEDENTES**

A través de la acción judicial, pretenden los accionantes se declare la existencia de una relación laboral entre el señor EDWIN ALONSO RAMÍREZ VASQUES, con la entidad accionada con ocurrencia entre el 1° de enero de 2016 y el 7 de mayo de 2017, la que aduce se ocultó bajo la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios, donde no se reconocieron las prestaciones sociales, ni beneficios laborales legales y extralegales, los cuales reclaman como herederos del causante, quien falleciera el 7 de mayo de 2017.

En respuesta a la acción la entidad se opuso a la totalidad de pretensiones señalando que la vinculación del actor lo fue como contratista para la ejecución del convenio inter-administrativo que se suscribieron con el Municipio de Medellín, sin que haya lugar al pago de los conceptos reclamados.

**En sentencia que desató la primera instancia**, el A Quo tras aludir al postulado de primacía de la realidad sobre las formas, halló acreditados los elementos constitutivos de una relación laboral luego de dar aplicación a la presunción establecida en el art. 20 del Decreto 2127 de 1945. Halló acreditado un salario base de \$ 1'861.323. con el que liquidó prestaciones legales y extralegales y ordenó el pago de una indemnización moratoria.

Inconforme con la decisión **la activa** consideró que la condena por concepto de prestaciones debía reliquidarse con un salario básico que reflejase la Prima de Navidad, Aguinaldo, Prima extra, tiempo extra, la Prima de Transporte, Subsidio de Transporte y la Prima de Vacaciones, como lo establece la convención colectiva de la entidad.

También pretenden se ordene el subsidio de alimentación, recalcular la devolución de aportes a seguridad social, teniendo en cuenta lo que hubiese devengado y cotizado el trabajador de haber sido vinculado laboralmente. Finalmente se duele porque el Juzgador no hizo uso de los poderes ultra y extra petita, para conceder un despido sin justa causa y la indemnización especial de que trata la ley 361 de 1997, argumentos expuestos como alegatos alegar en esta instancia.

A su vez la demandada, afirma que debe revocarse íntegramente la decisión toda vez que no se acreditó en el proceso la subordinación entendida como la facultad de impartir órdenes por el personal administrativo del empleador, de manera inequívoca e insoslayable, pues en su sentir lo que operó fue una relación ajena a una de carácter laboral, razón por la cual la remuneración del causante era mucho mayor a la

establecida para los conductores de ambulancia adscritos a la planta de cargos de la entidad.

### **ALEGATOS**

Dentro del término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 la activa presentó escrito donde reitera los argumentos de su demanda relativos a la existencia de una relación laboral con el plago pleno de acreencias laborales.

### **CONSIDERACIONES**

Previo al análisis, en el presente evento resulta relevante poner de presente que se encuentra por fuera de discusión que: **1)** Que el señor EDWIN ALONSO RAMIREZ VASQUES, prestó sus servicios a la accionada como conductor de ambulancia, a través de diferentes contratos de prestación de servicios entre el 1° de Enero de 2016 y el 7° de mayo de 2017, como lo decidió el juez en la sentencia y no fue objeto de apelación **2)** Tampoco se cuestiona que para el momento que se dio la relación con el Sr Edwin Alonso Ramírez, en la entidad regía una convención colectiva en favor de los trabajadores de la misma. (F. 170 y ss) **3)** No se discute en esta instancia la remuneración mensual hallada por el A Quo en la suma de \$ 1.861.323.00 **4)** No es materia de apelación o inconformismo la determinación del juez de la causa de dar por demostrada la prestación personal del servicio por parte del Sr Edwin Alonso Ramírez en los extremos temporales aludidos. **5)** Tampoco se discute la calidad de trabajadores oficiales de quienes desempeñan el cargo de conductor de ambulancia en la referida ESE METROSALUD, como lo definiera el Juez en la etapa de resolución de excepciones previas.

Se analizará en primera medida el inconformismo expresado por la pasiva quien expresó que no quedó acreditada la subordinación.

En el presente evento y dada la naturaleza jurídica de la entidad accionada habrá de remitirse a los artículos 1 y 2 Decreto 2127 de 1945 que refieren que para que exista un

contrato de trabajo, se requieren tres elementos: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario. Y de acuerdo con el artículo 20 ibídem, probada la prestación personal del servicio, nace la presunción de existencia de un contrato de trabajo, al margen de la denominación que se le dé o las condiciones de remuneración.

Conforme a los elementos de defensa del presente trámite, donde la pasiva sostiene que la relación de las partes fue de naturaleza civil a través de un contrato de prestación de servicios, conviene indicar que de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte ha establecido que el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios es la subordinación del trabajador respecto del empleador, entendida como la posibilidad que tiene el empleador de ejercer control y vigilancia sobre las labores del trabajador, imponiendo órdenes que deben ser cumplidas por el subordinado; en contraste el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante. Siendo entonces la subordinación el elemento diferenciador, su prueba está a cargo de aquel que niega la existencia de la relación laboral.

Se trata pues de una situación que debe ser analizada en cada caso concreto, sin que exista una tarifa legal o compendio de conductas que deban demostrarse para derruir la presunción a través de la prueba de la falta de subordinación, pues no todos los eventos objeto de debate presentan un panorama diáfano de subordinación como aquella que se ejerce bajo el ambiente de una fábrica, en tanto la realidad presenta múltiples formas de prestación de servicios.

Para estos eventos de zonas dudosas, a juicio de la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha de acudirse a la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, que a modo enunciativo referencia conductas que generan indicios de existencia de una relación laboral, entre ellos la prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona, la disponibilidad del trabajador, la aplicación de sanciones disciplinarias, el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo, realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el beneficiario del servicio, el suministro

de herramientas y materiales, así como el carácter de esencial de la labor prestada para el contratante.

Bajo estas premisas se descende al **caso concreto**, y estando probada la prestación del servicio con unos extremos definidos, encuentra la Sala que la accionada no aludió en su recurso a elemento probatorio alguno que lograra derruir la presunción de existencia de una relación laboral, a través de la demostración de una relación exenta de subordinación lo que era su carga a la luz de la normatividad referida. Por el contrario, solo se limitó a afirmar que no habían pruebas de la subordinación, desconociendo que por efectos de la presunción legal se traslada automáticamente la carga de la prueba con el solo hecho de encontrar el juez acreditado la prestación personal del servicio, la que no fue desmentida en ningún momento al formular la alzada. Razón suficiente por la que se confirmará la decisión de primera instancia en este sentido.

Luego, en relación al reproche de la activa referentes a la cuantificación de las acreencias laborales procede la corporación a su verificación, partiendo de algunos aspectos que no fueron debatidos, a saber: el monto de la remuneración mensual devengada en la suma de \$ 1'861.323.00. y la aplicación de la convención colectiva aportada.

A folios 186 del expediente digital, se puede leer la cláusula CUARENTA Y CUATRO del acuerdo convencional, que establece que constituyen factores salariales la Prima de Navidad, Aguinaldo, Prima extra, tiempo extra, la Prima de Transporte, Subsidio de Transporte y la Prima de Vacaciones:

Ahora, se debe precisar que en la sentencia que se *revisa se declaró*

*“que entre el señor EDWIN ALONSO RAMIREZ VASQUEZ (fallecido), y la EPS demandada METROSALUD existió un contrato de trabajo, en los términos que lo establecen el D. 2127 del 45, cuya vigencia tuvo lugar sin solución de continuidad entre el 1° de enero de 2016 y el 7 de mayo de 2017 habiendo percibido como salario básico mes la suma de \$1'861.323 **y promedio mes \$ 2'620.761.** SEGUNDO: CONDENAR a la EPS METROSALUD, a pagar a*

*los herederos o sucesores determinados e indeterminados del causante señor EDWIN ALONSO RAMIREZ VASQUEZ, lo siguiente: \$3'545.307 por concepto de auxilio de cesantías. \$1'151.043 por concepto de intereses sobre las cesantías. \$1'310.381 por concepto de compensación en dinero de vacaciones. \$1'861.323 por concepto de prima de vacaciones. \$3'494.348 por concepto de primas de navidad. \$1'551.103 por concepto de aguinaldo. \$2'791.984 por concepto de prima extra. \$29'781.168 por concepto de seguro de vida más los intereses de mora a la tasa del 2.5% liquidados desde el 8 de mayo del 2017. \$1'348.577 por concepto de auxilio de transporte. \$155.595 por concepto de devolución de aportes al SGSS. \$87.358,70, diarios desde el 8 de agosto de 2017 y hasta tanto se cancele lo adeudado por dichos conceptos, a título de sanción moratoria; y las costas del proceso en el equivalente al 5% de lo ordenado pagar.*

Luego de revisadas las operaciones se observa que en la decisión de primer grado, el funcionario halló el salario promedio en la suma de \$ 2'620.761.00 y así lo declaró en la parte resolutive acorde con la cláusula 44 de la convención, como lo expresa al minuto 19 de la audiencia de fallo, y lo tuvo en cuenta al efectuar la liquidación de las prestaciones, salvo aquellas que por preciso mandato convencional, deberían liquidarse con el salario básico, así:

*El auxilio de cesantías y sus intereses, compensación en dinero de vacaciones, prima de navidad sí se observó el salario promedio por lo que no sufrirá modificación.*

*\$1'861.323 por concepto de prima de vacaciones: No se modificará porque la convención en su art. 29, habla de salario básico como lo hizo el A Quo.*

*\$1'551.103 por concepto de aguinaldo. No se modificará porque la convención habla de 25 días de salario básico como lo hizo el A Quo.*

*\$2'791.984 por concepto de prima extra. No se modificará porque la convención habla de salario básico para su cálculo como lo hizo el A Quo.*

En lo que tiene que ver con el subsidio de alimentación y la solicitud de recalcular la devolución de aportes a seguridad social, teniendo en cuenta lo que hubiese devengado y cotizado el trabajador de haber sido vinculado laboralmente y con ello la posibilidad de haberse afiliado al sindicato para causar el primero; lo cierto es que el fallador no puede aceptar eventualidades, hipótesis que hubiesen podido ocurrir y debe decidir con fundamento en hechos claros, ciertos y demostrados, como lo hizo. Razón por la cual se impartirá confirmación a la decisión en estos puntos.

Finalmente, en lo que hace referencia al uso de los poderes ultra y extra petita, para conceder el despido sin justa causa y la indemnización especial de que trata la ley 361 de 1997, basta decir que los mismos obviamente no fueron expuestos en la demanda, justificados y mucho menos probados. No obstante, es claro que dicha razón para la fecha de la fijación del litigio la apoderada estaba en total posibilidad de conminar al juez para que fijará la materia del debate extendiéndose a estos puntos, lo que no hizo; razón por la cual tales temas no fueron discutidos en el proceso, quedando huérfanos de debate probatorio por lo que mal haría el juzgador en sorprender a la contraparte con unas condenas no solicitadas ni debatidas, por lo que desbordaría los márgenes impuestos por el legislador para el ejercicio de esa facultad.

De esta manera quedan resueltos los puntos materia de apelación.

Costas como indicó el A quo, sin costas en esta instancia en tanto las réplicas de las partes no fueron acogidas

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL **CONFIRMA** en todas sus partes la sentencia de primera instancia conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Costas como indicó el A quo, sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

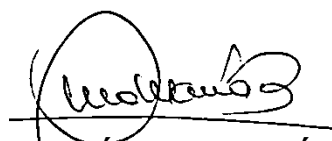
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05088- 31- 05-**009-2018-0009-01**  
Demandantes ISABEL CRITINA LONDOÑO OROZCO y Otro  
Demandados E.S.E METROSALUD  
Decisión: **CONFIRMA**

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 15 de marzo de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

**SECRETARIO**